

"ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS".

Delegación provisional.

Valladolid.

Suplemento al N° 10 de las "Hojas Informativas".

Octubre, 1938.
III Año Triunfal.

Indice de Legislación.

Sumario:

Legislatura del Estado:

Militantes de F.E.T. y de las J.O.N.S.....	Pág.	Z/1
Medalla de sufrimientos por la Patria; conce- siones.....	"	Z/1
Condecoraciones.....	"	Z/1
Aprovechamientos resineros.....	Págs.	Z/1 a 2
Aprovechamiento de pastos y rastrojeras.....	Pág.	Z/2
Moratoria para el pago de contribuciones atra- sadas.....	"	Z/2
Suspensión de Obligaciones de pago.....	Págs.	Z/2 a 3
Contabilidades bancarias.....	Pág.	Z/3
Elevación de las tarifas postales y telegráfi- cas.....	Págs.	Z/3 a 4
Crédito a los cultivadores de trigo.....	Pág.	Z/4

Legislatura del Gobierno.

Descuento de haberes.....	Pág.	Z/4
Reforma del Estatuto del Patronato de Indígenas del Golfo de Guinea.....	Págs.	Z/4 a 5
Rama de la Almenara: Nombramiento, demarcación y composición.....	"	Z/5 a 6
Rama del pimentón.....	"	Z/6
Concesión de crédito a los cultivadores de tri- go.....	Pág.	Z/6

Sigue el Sumario.....

Ministerio de Asuntos Exteriores.

Orden de Isabel la Católica: Reglamento y concesión de condecoraciones.....	Pág.	Z/7
---	------	-----

Ministerio de Justicia.

Tribunal Supremo: nombramientos.....	Pág.	Z/7
Disolución de Sociedades mercantiles.....	Pág.	Z/7
Creación del Patronato para redención de las penas por el trabajo.....	Págs.	Z/7 a 9
Colocación de Mutilados.....	Pág.	Z/9
Estadísticas de quiebras y suspensión de pagos.....	Pág.	Z/9

Ministerio del Interior.

Denominación futura de El Ferrol.....	Pág.	Z/9
Documento Nacional de Identificación.....	Págs.	Z/9 a 11
Responsabilidad a los impresores, litógrafos y grabadores.....	Pág.	Z/11
Auxilio Social.....	Pág.	Z/11
Protección a las instituciones de la madre y el niño.....	Págs.	Z/11 a 12
Composición de los platos en las comidas.....	Pág.	Z/12

Ministerio de Hacienda.

Circulación de moneda.....	Pág.	Z/12
Contribución de Utilidades.....	"	Z/12
Deuda del Estado: pago de intereses y admisión de facturas.....	"	Z/13
Moratoria.....	"	Z/13
Juntas administrativas bancarias.....	"	Z/13
Secciones provinciales de Banca.....	Págs.	Z/13 a 14

Ministerio de Industria y Comercio.

Productos siderúrgicos y metalúrgicos.....	Pág.	Z/14
Certificados de Productor Nacional.....	"	Z/14
Pesca con artes de arrastre.....	"	Z/14
Comisión Ordenadora de la Producción y Distribución de cobre.....	Págs.	Z/14 a 15

Ministerio de Agricultura.

Riqueza forestal.....	Págs.	Z/15 a 16
Repoblación ganadera.....	Pág.	Z/16

Sigue el Sumario.....

Ministerio de Educación Nacional.

3)

Patronatos de Formación Profesional: nom- bramiento.....	Pág.	Z/16
Utilización de Bibliotecas por los alumnos de Enseñanza Primaria.....	Págs.	Z/16 a 17
Constitución de Patronatos provinciales pa- ra el fomento de Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos.....	Pág.	Z/17
Depósito Legal.....	Págs.	Z/17 a 18
Formato del libro de calificación escolar..	Pág.	Z/18
Ingreso en los centros de enseñanza media..	"	Z/18
Escolaridad de la Segunda Enseñanza.....		Z/18
Diligencias y tasas en los Centros del Ense- ñanza media.....	Págs.	Z/18 a 19
Comisión Asesora de Segunda Enseñanza.....	Pág.	Z/19

Ministerio de Obras Públicas.

Pases por ferrocarril.....	Pág.	Z/19
----------------------------	------	------

Ministerio de Organización y Acción Sindical.

Infracción de Leyes sociales: reglamenta- ción, pago e inversión de las multas....	Págs.	Z/19 a 20
Reglamento de Síndicos Económicos.....	Pág.	Z/20 a 25
Personal: Separación del servicio.....	Pág.	Z/25
Mercados dominicales.....		Z/25
Accidentes del Trabajo en la industria: Re- forma del Reglamento de 31 de Enero de 1933.....	Págs.	Z/26 a 27
Creación de la Junta Administradora Nacio- nal de Casas Baratas y Económicas.....	Pág.	Z/27
Reincorporación de los Combatientes.....	Págs.	Z/27 a 28
Subsidios familiares: Aprobación del Regla- mento; rectificación a la Base segunda de la Ley de 18 de Julio de 1938.....	Págs.	Z/28 a 29

Índice de Legislación.Jefatura del Estado.Militantes de F.E.T. y de las J.O.N.S.

Por Decreto de 1º del actual (B.O. del mismo día) se concede la condición de militantes de F.E.T. y de las J.O.N.S. a aquellos que por la causa de Dios y de España sufrieron privación de libertad en la zona roja con posterioridad al 17 de Julio de 1936, quedando las asociaciones y agrupaciones unificadas en una sola entidad de carácter nacional con la denominación de "Hermandad de Cautivos por España".

Medalla de Sufrimientos por la Patria: Concesiones.

Por Decreto de la misma fecha publicado en el indicado B.O. se concede la medalla de sufrimientos por la Patria, a los que hubieran sufrido prisión, en la zona no liberada, por la causa de España, y a los padres, hijos y cónyuges de los muertos en el cautiverio o a consecuencia de la actual campaña, por la liberación y engrandecimiento de España.

Condecoraciones.

Por Decretos de 1º del actual (B.O. de los días 1 y 2), se concede el título de Caballero y la Gran Cruz de la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas al Embajador de Portugal, Don Pedro Teotónio Pereira; al Ministro del Reich, su Excelencia Rudolf Hess; al Ministro de Estado de Italia, Roberto Farinacci; a los Generales Queipo de Llano; Saliquet; al Comisario de España en Marruecos D. Juan Beigbeder; al Sr. Felipe Clemente de Diego, Presidente del Tribunal Supremo, y a los Sres. Zuloaga, Montes Domínguez y Miralles. Se nombra Comendadores con Cruz de la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas, a los Sres. Barón Emmanuele Basile; Cesare Gullino; Duque della Salandra; Giorgio Spicci; Ludovico Ferrandi; Branco Adriani; Livio Gaetani; Botelho de Mesquita; Cesáreo Augusto de Almeida; Pinto de Castello Branco; General Barón; Gobernador civil de Oviedo, Sr. Ceano Vivas - Sabán; Martínez; Caballero Villalba; García Morato; Méndez Parada; Cirujano; Navarro; Girón Velázquez; Zorrilla Dorronsoro; Zorrilla Fuentes, Finat, Zorrilla; García Viñolas y P. Bernhardt. Comendadores, con cruz de la misma Orden, a los señores Altuna Villalva; Gil García; y Banzá Salas.

Aprovechamientos resinosos.

Por ley de 24 del pasado Septiembre (B.O. de 2 del actual), se dispone que la revisión de precios a satisfacer por los rematantes de los productos resinosos, se hará todos los años.

La revisión de precios se efectuará con arreglo a instrucciones oficiales que aprobará el Ministro de Agricultura, quedando obligado el rematante, en caso de abandono de alguna explotación antes de expirar el contrato, a pagar al propietario del monte una indemnización que se someterá a la aprobación del Ministro de Agricultura.

Las herramientas y material que el rematante utilizaba para transportar la miera, estará adscrita a la explotación del monte.

Cuando quede desierta la subasta de un aprovechamiento resinero de un monte, la Entidad propietaria podrá efectuar el aprovechamiento por administración.

Las Jefaturas de los Distritos forestales cuidarán de que no se paralice la explotación de ningún monte en resinación a no ser por fuerza mayor, pudiéndose imponer multas hasta de 50.000 pesetas a los causantes de la paralización y pudiéndose emplear para la exacción de multas el procedimiento de apremio judicial.

Aprovechamiento de pastos y rastrojeras.

Una Ley de 7 del actual (B.O. del 9), dispone que las Juntas Locales de Fomento Pecuario propondrán a la aprobación de las Juntas Provinciales en el plazo de 90 días, las ordenanzas que deban regir el aprovechamiento de pastos y rastrojeras.

Las Juntas Locales de Fomento Pecuario, quedan facultadas para limitar sin alteración de linderos los núcleos parcelarios convenientes a los efectos de aprovechamientos temporales y por el período de duración de éstos.

Quedan excluidas las fincas que por su extensión y características sean susceptibles de explotación, independiente de sus aprovechamientos de pasto.

Las Juntas locales podrán imponer sanciones hasta la cuantía de 250 pesetas, a los infractores de lo dispuesto en esta ley y en las ordenanzas complementarias para su aplicación, pudiendo interponerse recurso de alzada ante el Ministerio de Agricultura en plazo de 15 días, contra las expresadas sanciones.

Moratoria para el pago de contribuciones atrasadas.

Por ley de 13 del actual (B.O. del 19), se otorga moratoria a los indígenas del Golfo de Guinea, para el pago de las contribuciones que adeudan al Tesoro.

Sólo será aplicable a los que no puedan satisfacer sus atrasos de débitos de contribución, sin desatender sus más perentorias necesidades. La aplicación se hará de modo, que la deuda pendiente quede amortizada gradualmente en un período de cinco años, a cuyo efecto, satisfarán los deudores con la anualidad corriente, tres de atraso; dos, cuando se trate de créditos posteriores a 1928, y una, cuando la deuda no exceda de cinco anualidades.

El incumplimiento de las condiciones de pago, determinará la pérdida de los derechos y beneficios otorgados y se procederá ejecutivamente contra los bienes del deudor.

Suspensión de Obligaciones de pago.

Una ley de 13 del actual (B.O. del 20), dispone, que el reintegro de los Establecimientos de crédito de los galdos de cuentas corrientes se liberen quedan en suspenso si las cuentas fueran posteriores al 1º de Julio de 1936. Si son anteriores la suspensión del reintegro cesará.

do, se limitará a la porción que exceda del saldo de 18 de Julio de 1936. Se entenderá que la suspensión del reintegro es total si el titular posee el Tesoro Público del enemigo, un Sindicato marxista o anarquista, o un Partido político del Frente Popular. Esta suspensión se acordará también cuando el titular se caracterizase como copartícipe de la gestión pública del enemigo.

Los establecimientos de crédito, deberán proponer la suspensión total de reintegro en las cuentas corrientes, imposiciones o libretas, que habiendo sido consumidas en su casi totalidad durante el período marxista, aparezcan répuestas por ingresos en el mes anterior a la liberación.

Se faculta a las Secciones provinciales de Banca, para levantar la suspensión en determinadas condiciones.

El margen "disponible" a la fecha de la liberación de una plaza en las cuentas corrientes de crédito abiertas en la misma, queda anulado por esta ley. Las obligaciones de pago en suspenso, no darán lugar al devengo de interés durante la suspensión.

Contabilidades bancarias.

Por ley de 13 del actual (B.O. del 21), se establece que en los 30 días siguientes a la liberación de una oficina bancaria, la Oficina que se encuentre en el territorio afecto al Gobierno Nacional formulará por duplicado ante el Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio, una declaración sobre disponibilidades encontradas en Caja; estado de la cartera, tanto de títulos como de efectos; libros desaparecidos; situación de los depósitos de títulos; y situación de las Cajas de seguridad, y particularmente.

Al tratar el Título II del procedimiento pleno, se ocupa del Comité de clientes, integrado por los Comités de cuentacorrentistas, de depositantes de títulos y de arrendatarios de Cajas de seguridad.

Se fijan las funciones propias de cada Comité.

Se consideran inmovilizados los saldos activos o pasivos. En las anteriores al 18 de Julio de 1936, se inmovilizará el saldo si fuere, descomulgado por la privación de contabilidad. Los datos que por los Bancos interesen de los Notarios, Agentes de cambio, Corredores de Comercio se suministrarán de oficio.

En caso de desacuerdo, se someterá la cuestión a la amigable conciliación, siendo inexcusable la aceptación de la designación.

Los acuerdos se someterán al Comité que corresponda.

Finalmente, se dispone que el contenido de la ley tendrá efecto retroactivo conforme a lo que en la misma se determina.

Elevación de las tarifas postales y telegráficas.

Una ley de 13 del actual (B.O. del 26) reforma los artículos 40 al 50 de la ley del Timbre variando el franqueo que será de 0,40 cents. los 25 primeros gramos de peso y de 0,30 céntimos por cada fracción siguiente, excepto para el Protectorado de Marruecos y Tánger, que será de 0,15 cents. por cada 20 gramos o fracción.

El franqueo de tarjetas postales será de 0,20 céntimos y de 0,10 céntimos el de las dobles o con respuesta pagada para fuera de las poblaciones. Para el interior, será de 0,15 céntimos en las primeras y de 0,20 céntimos en las segundas.

Se fija el franqueo de las tarjetas abiertas, y el de los periódicos de 1 céntimo por cada 140 gramos o fracción cuando se envíen por las Empresas periodísticas. En los envíos particulares se abonará un franqueo mínimo de 0,05 céntimos hasta 700 gramos de peso, y de 1 céntimo por cada 140 gramos más o fracción de este peso.

El franqueo de libros será de dos céntimos por cada 50 gramos o fracción, y para el interior de poblaciones de 0,05 céntimos por cada 200 gramos. A continuación figuran los franqueos para manuscritos, cartas, papeles de negocios y muestras sin valor.

En cuanto al de los Paquetes postales será de 2,50 Ptas., para África, Protectorado, y Tánger. El franqueo de los paquetes muestra de 1,35 por cada paquete.

Para cartas certificadas 0,40 céntimos y cuando se trate de libros, o revistas periódicas el franqueo será de 0,10 céntimos.

Se fijan los derechos de reembolso y se fija en 0,15 céntimos por cada palabra para telegramas.

Crédito a los cultivadores de trigo.

Por ley de 27 del actual (B.O. del 29), se autoriza a los Ministros de Hacienda y Agricultura para establecer un servicio de crédito a los cultivadores de trigo, reservándose dicha operación a los Bancos y Cajas de Ahorro que se adhieran, constituyendo el "Consortio Bancario de Crédito a los trigueros".

La cuantía del préstamo no excederá del 50 % del valor de la finca y en ningún caso de 25.000 ptas. El vencimiento del crédito será el 30 de Noviembre de 1939, y descuento anual del 4 % libre de comisión. El volumen global de estos créditos, no excederá de 300 millones de pesetas. (1)

Vicepresidencia del Gobierno.

Descuento de haberes.

Por Decreto de 29 del pasado Septiembre (B.O. de 1º del actual), se deja sin efecto el Decreto nº 69 de la Junta de Defensa Nacional, y Orden de 20 octubre de 1936, en relación con el descuento de haberes de los funcionarios, cuya disposición afecta ya a los haberes del mes de Septiembre pasado.

Reforma del Estatuto del Patronato de Indígenas del Golfo de Guinea.

Por Decreto de 29 de Septiembre último (B.O. de 2 del actual), se organiza de un modo flexible y eficiente, con medios materiales y humanos, la obra de redención social y económica de los indígenas del Golfo de Guinea.

(1) N. de la R.- Véase en este mismo número (pág. Z/6) la referencia a la Orden desarrollando esta Ley.

el Estatuto del Patronato regulado por Decreto de 1928.

El Decreto que nos ocupa, se subdivide en 3 títulos, el primero de los cuales comprende 3 capítulos; el 2º 8; y el tercero dos capítulos, con dos artículos adicionales y una cláusula derogatoria.

El capítulo 1º, trata del Patronato y su objeto, definiendo lo que es el Patronato, e indicando los fines a cumplir, tales como, el fomentar la cultura de los naturales y su adhesión a España, acordar las emancipaciones de los capacitados para gobernarse; ejercer sobre el no emancipado las funciones de Consejo Tutelar; Velar por el cumplimiento de las leyes sociales, etc.

El Capítulo segundo, establece lo que se considera como ingresos del Patronato, entre los que figuran, los legados, subvenciones, bienes de los indígenas en caso de fallecimiento, importe de multas, las 2/3 partes de las cantidades que como salarios o gratificaciones devenguen los presos y penados por trabajos realizados; lo que se contenga por retiro obrero; el 50 % del importe de los derechos que graven el contrato de trabajadores; las 2/3 partes del 25 % de las multas impuestas por infracciones de las leyes de Policía que ingresaban en la Caja de socorros de la misma; y cualquier otro ingreso que autoricen las leyes o acuerde la Junta y apruebe el Gobernador General.

Se determina la significación de indígena que es cualquiera de raza de color que resida en la Colonia.

Al ocuparse el Título II, del Gobierno, dirección y organización del Patronato, dispone, que su dirección y gobierno, estarán a cargo del Presidente de la Junta de Patronos, organizándose el Patronato en 3 Secciones y la Secretaría general.

Establece el Decreto las facultades del Presidente, y de la Junta de Patronos, así como del Pleno y de las Comisiones Permanentes, tratándose, seguidamente, de las disposiciones comunes a todas las Comisiones, de la Secretaría y del personal, y finalmente, de las filiales, de las Delegaciones y artículos adicionales, quedando derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en el Estatuto.

Rama de la Almendra: Nombramiento, demarcación y composición.

Por Decreto de 7 del actual (B.O. del día 9), ha sido designado D. Juan Miranda González, como Secretario de la Rama de la Almendra de la Comisión de Frutos Secos.

Una Orden de 8 del actual (B.O. del 9), fija las demarcaciones de las zonas de la Rama de la almendra comprendiendo en la Zona primera; Baleares, y Palma de Mallorca; en la segunda, Málaga, Palencia, Zamora, Burgos, Salamanca, Valladolid, Cáceres, Badajoz, Huelva, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada.

En la Zona tercera Levante, con capitalidad en Castellón, Alava, Logroño, Soria, Navarra, Zaragoza, Huesca, Tarazona, Lerida, Teruel y Castellón.

Cuando las Delegaciones consideren que las entregas de almendra no son las normales, podrán prohibir la salida de almendra de alguna provincia.

Los tenedores de almendra en cantidad superior a 5.000 kilos en cáscara ó 2.000 en pepita, están obligados a comunicar semanalmente el movimiento y existencias en sus almacenes.

Los Delegados de zona, podrán imponer cupos de entrega obligatoria a los mencionados tenedores.

Los Delegados podrán acordar el pago de la totalidad del precio inicial que se establece en el artículo 1º transitorio de la Orden de 22 de Agosto último.

Por Orden de 15 del actual (B.O. del 18), se dispone, que forme parte de la Rama de la Almendra de la Subcomisión de Frutos Secos, un Vocal representante del Comité de Moneda Extranjera nombrado por el Ministerio de Hacienda.

Rama del pimentón.

Por Orden de 18 del actual (B.O. del 23), se crea la Rama del pimentón que en su encuadrará en la Comisión reguladora correspondiente.

Quedará constituida la Rama, por un Presidente, y 7 Vocales, de los cuales, tres, representarán los Servicios de Agricultura, Comercio, y Comité de Moneda Extranjera; dos Vocales representarán a los productores y otros dos, a los exportadores.

El Secretario se designará por el Gobierno a propuesta del Presidente, y la propuesta de normas para el funcionamiento de esta Rama elevará a la aprobación de los Ministerios de Agricultura, Industria y Comercio, por el Presidente.

Concesión de crédito a los cultivadores de trigo.

Por Orden de 29 del actual (B.O. del 30), se desarrolla la Ley de Bases de 27 de octubre corriente, estableciendo un servicio de crédito a los cultivadores de trigo cuyo volumen global no excederá de 300 millones de pesetas.

Constituido el Consorcio Bancario de Crédito a los trigueros, se imprimirán los pagarés en series de 100 y 1.000 pesetas.

Se fijan la estructura y características de los créditos concedidos y se exceptúa de acudir a los beneficios de esta Orden a los cultivadores que por virtud de hipoteca, tuviesen la cosecha gravada con un derecho real.

Las instancias han de suscribirse antes de 1º de abril próximo, siendo de la competencia de una Junta integrada por el Jefe del Servicio Nacional del trigo, el del Servicio Agronómico y un representante de la Central Nacional-Sindicalista, la resolución de las instancias.

Los beneficiarios sólo podrán vender trigo a intermediarios que exceda de la porción a depositar en los Almacenes del Servicio Nacional.

Los gastos del Consorcio se prorratarán entre sus miembros a porción de las respectivas participaciones.

X X
X X

Ministerio de Asuntos Exteriores.Orden de Isabel la Católica: Reglamento y concesión de condecoraciones.

Por Decreto de 29 del pasado Septiembre (B.O. de 12 del actual), se organiza la Orden de Isabel la Católica y se establecen los casos que podrá concederse, enumerándose las categorías en que se subdivide y las personas que por sus cargos son acreedoras a esta condecoración.

Se organiza la concesión de collares que se podrán otorgar a nacionales y extranjeros, y no podrán exceder de 25, y se designa como Gran Maestre al Jefe del Estado.

Por Decretos de 12 del actual (B.O. del mismo día), se concede la Gran Cruz de Isabel la Católica, a D^a Soledad Alonso de Drisdale, y el título de Caballero y Gran Cruz de la misma Orden, a los Sres. Pavila; Ayvera, y Kindelán.

X X

Ministerio de Justicia.Tribunal Supremo: Nombramientos.

Por Decretos de 20 del pasado Septiembre y 6 de Octubre actual, (B.O. de 3 y 22 del corriente), se nombra Magistrados del Tribunal Supremo a los Sres., siguientes: D. Germán Prior; D. Ildefonso Bellón; D. Mariano Miguel Rodríguez; D. José Marquez; D. Domingo Guzmán; D. Eugenio Elizaguirre; D. Eduardo Divar; D. Eduardo Alonso; D. Felix Alvarez; D. Juan Bermúdez; D. Joaquin Lacambra; D. Rafael Rubio; D. Celestino Varedor; D. Luis Felipe Vivancos y D. Luis Suárez.

A D. Ramón García del Valle, se le nombra Teniente Fiscal del mismo Tribunal y a D. Ramón Gallardo, D. Juan Garaz, Romero, D. José Luis Garlo, D. Manuel Gándarias, D. José M^a de Santiago, y D. José M^a R. Villa-Abogados Fiscales de dicho Alto Tribunal.

Disolución de Sociedades mercantiles.

En el B.O. de 7 del actual, se publica una resolución, fecha 30 de Septiembre último, por la cual se ordena que en el plazo más breve posible los Registradores Mercantiles, remitan al Servicio de Estadística, del Ministerio de Organización y Acción Sindical, el resumen numérico de la creación, modificación y disolución de Sociedades mercantiles de cualquier clase inscritas en sus Registros desde 12 de Julio de 1936 hasta fin de Septiembre corriente, cuyos datos facilitarán también sucesivamente, el día 12 de cada mes.

Creación del Patronato para redención de las penas por el trabajo.

Por Orden de 7 del actual (B.O. del 11), se crea, dependiente de la Secretaría del Servicio Nacional de Prisiones, un servicio para redención de las penas por el trabajo cuya ejecución se encomienda a un Patronato central y a las Juntas locales.

Dicho Patronato será presidido por el Jefe del Servicio Nacional de Prisiones, y figurarán como Vocales, el Inspector de Prisiones, un miembro de la Secretaría Técnica de la Jefatura del Servicio Nacional de Prisiones, un representante del Servicio de Prensa y Propaganda, y un Sacerdote o religioso, propuesta por el Primado.

Las Juntas locales las nombrará la Jefatura del Servicio Nacional de Prisiones, componiéndose del Alcalde, del Cura párroco y de un varón de libre nombramiento del Servicio de Prisiones, que se procurará ser mujer.

Los Directores de los establecimientos penitenciarios formularán al Patronato, relación de los reclusos que hayan trabajado en el anterior, haciendo el recluso constancia, de los días trabajados y domicilio de sus familiares, para el pago del subsidio.

A dichas declaraciones, se acompañará certificado de los Directores del Establecimiento acreditativos del rendimiento normal del obrero cuando el trabajo sea a destajo, el certificado de los capataces sobre el número de días de jornal trabajado por cada obrero.

Las facultades del Patronato se refieren: a recibir y otorgar peticiones de presos; a reclamar del Registro Índice, las relaciones de reclusos aptos para el trabajo, con nombres y apellidos, etc.; a reclamar de Hacienda, Diputaciones o Ayuntamientos, las cantidades globales para justificar; a recibir reclamaciones de háberes; a recibir las cuentas para proponer al Gobierno la condonación de pena por días de trabajo; a proponer a la Jefatura cambio de destino de los penados; a encargar las actividades privadas para la propaganda entre los reclusos; a administrar las Bibliotecas de los establecimientos penitenciarios y adquirir libros, folletos, revistas y periódicos; y a fomentar la propaganda de asistencia religiosa de los reclusos auxiliando en su labor a los capellanes.

Para las obras del Estado, Diputaciones y Ayuntamientos, se atenderán preferentemente las peticiones de los obreros reclusos.

Los patronos de obras particulares, en las que trabajen reclusos, pagarán a la Jefatura del Servicio Nacional de Prisiones, el salario íntegro que según las bases de trabajo que rijan en la localidad correspondiera pagar a los trabajadores reclusos si se tratase de otros obreros libres. Este Organismo, después de pagar el subsidio, en su lugar a las familias de los trabajadores reclusos hasta el límite establecido, ingresará el remanente en la Hacienda para el Estado.

El pago de los seguros sociales que se establezcan con carácter obligatorio, será de cuenta de la entidad o patrono a cuyo servicio trabajen los presos.

El importe de las horas extraordinarias o del trabajo a destajo se entregará, sobre los límites ya señalados a las familias de los reclusos con derecho a percepción de subsidio familiar, sin perjuicio de que éstos puedan abonar al recluso en su cuenta, las cantidades que ingresen, una vez cobradas por conducto de las Juntas locales.

El jornal de las mujeres reclusas, se organizará análogamente a la forma que queda expresada a favor de los varones, cuando en los establecimientos haya talleres de labores y trabajos de su sexo.

sólo tendrán derecho al subsidio los reclusos legítimamente casados, y los hijos que tengan la calidad de legítimos o naturales reconocidos.

La Jefatura del Servicio Nacional de Prisiones, elevará al gobierno, semestralmente, una Memoria en la que figurarán los datos y resultados obtenidos en cuanto al trabajo de los reclusos, subsidios a las familias y propaganda realizada.

Colocación de Mutilados.

Por Orden de 7 del actual (B.O. del 14), se dispone que podrán ser comprados Aspirantes a Registradores de la Propiedad, los Mutilados que hubiesen aprobado algún ejercicio de oposición, los cuales serán colocados a continuación de los últimos de la promoción.

Los derechos reconocidos se reglamentarán por el artículo 46 del Reglamento de 5 de Abril último y Decreto de 1º de Marzo de 1937.

Estadísticas de quiebras y suspensión de pagos.

Una Orden circular de 14 del corriente (B.O. del 18), dispone que, a los Juzgados de primera instancia, se remitan a las Jefaturas provinciales de Estadística, todos los datos de quiebras y suspensiones de pagos, registrados como entrada desde primero de Julio de 1936 a primero de Octubre de 1938. Cada trimestre se reiterará, sucesivamente, la remisión de los datos a dichas Jefaturas.

También se remitirá el mismo estado, afirmativo o negativo del registro de dichos, datos a la Subsecretaría del Ministerio de Justicia.

x x
x x

Ministerio del Interior.

Denominación futura de El Ferrol.

Por Orden de 30 del pasado Septiembre (B.O. de 12 del actual), se dispone, que como consecuencia de la aspiración del Ayuntamiento de El Ferrol, en lo sucesivo se designará esta ciudad con el nombre de "El Ferrol del Caudillo" como homenaje al más ilustre de sus hijos, el Generalísimo y Jefe del Estado y de la Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S.

Documento Nacional de Identificación.

Una Orden de 21 de Septiembre último (B.O. de 9 del actual), publica el Reglamento del Servicio de identificación para ejecución del Decreto de 9 de Abril de 1938.

En el documento de identificación de tenencia obligatoria, se consignarán los nombres, apellidos, filiación, naturaleza, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, profesión, domicilio, y circunstancias físicas del interesado, así como su fotografía de frente y descubierto; la huella dactilar; situación militar, etc.

La duración del documento de identidad se fija en 4 años sin perjuicio de las renovaciones que se puedan hacer antes de ese plazo por alteraciones de los datos.

Como indicamos, es obligatoria para todo español que tenga 16 años cumplidos, y será documento que acredite la personalidad en todo el territorio nacional y fuera de él ante las Autoridades y sus Agentes, Centros, Tribunales, Organismos, Dependencias, etc.

Será precisa y obligatoria la exhibición, en todas las dependencias públicas y en las Empresas que tengan relación directa o indirecta con la Administración.

Las Empresas de Transportes de viajeros exigirán la exhibición del documento de identidad antes de la expedición del billete, y lo mismo hará por lo que respecta a los vehículos de servicios públicos.

Se solicitará el documento, por declaración jurada que se facilitará gratuitamente; con esta y a la vista de las huellas dactilares se formará la ficha dactiloscópica, que se hará por duplicado, una para la Oficina Central y otra para las Delegaciones Provinciales y, segun- mente, se harán los documentos de identidad.

Los documentos de identidad, serán iguales para todos en cuanto a su formato, pero varían los derechos de expedición: Personas con ingresos superiores a 12.000,01 pesetas, abonarán 50 pesetas. Entre 12.000 y 9.000,01 pesetas: 25 pesetas. Entre 9.000 y 6.000,01 pesetas, 10 pesetas. Entre 6.000 y 3.000,01 pesetas, 5 pesetas. Entre 3.000 y 1.000,01 pesetas, 2 pesetas. Personas con ingresos iguales o inferiores a 1.000,01 pesetas, 1 peseta y para los que carezcan de ingresos, gratuito.

También, para sufragar el coste de la fotografía, se establece una escala que oscila entre 10 pesetas y 2 pesetas, según paguen 50 pesetas ó 5 pesetas de carnet. A los demás se les hará gratuitamente.

Se indican las causas de renovación extraordinaria del documento y sólo se solicitará uno nuevo cuando se extravíe el que se posee.

Además del documento original, podrá solicitarse un duplicado, el cual tendrá el mismo valor que el original a los efectos de exhibición y sobre todo para los casos en que deba entregarse temporalmente el documento.

Las sanciones por infracciones que se cometan, se castigarán con multas de 100 a 500 pesetas a los que no presenten las declaraciones dentro de plazo, falta de presentación para recoger el documento, reacciones en los actos que tengan que realizar los particulares en relación con el servicio.

Con multas de 500 a 2.500 pesetas, por no abonar los derechos, equivocación de los datos, etc.

Con multas de 5.000 a 10.000 pesetas por suplantación de persona, por presentar documentación falsa, por entregar a otra persona para uso el documento, etc.

Cuando se trata de Sociedades, Empresas públicas o privadas, Diputaciones, Bancos, etc., las sanciones serán de 25 a 20.000 pesetas. Las multas se harán efectivas en el plazo de 15 días, siendo necesario el pago de la multa para entablar el recurso. Cuando se trate de insolventes podrán las Delegaciones solicitar de los Gobernadores Civiles la detención y prisión de los mismos. Contra estas disposiciones, no cabe más recurso que el de súplica ante el Ministerio del Interior.

Se crean, dependientes de la Oficina Central existente en el

16 del Interior, 18 Negociados y en cada capital de provincia existirá una Oficina Delegada de la Oficina Central de Identificación.

El Decreto que, extractamos, se sigue ocupando después, del personal de las condiciones que el mismo ha de reunir para entrar en dichos negociados, así como que el personal subalterno se cubrirá todo él, preferentemente con mutilados de guerra, aptos para desempeñar las misiones propias de dichos cargos.

Las adquisiciones, se harán por subastas formulándose por el Negociado correspondiente el oportuno pliego de condiciones técnicas y legales para la subasta, fijándose la cifra de 50.000 pesetas para delimitar las funciones del Jefe de la Oficina Central y del Ministro.

Respecto a la contabilidad, se llevará en la Oficina Central por el Negociado de Intervención y Contabilidad una cuenta corriente con la Delegación Provincial, y a continuación, se determinan las funciones que corresponden a cada Negociado.

En el B.O. de 20 del corriente, se insertó una rectificación de los errores aparecidos en los artículos 46, 55, 59 y 76 (Orden de 14 de mayo de 1938).

Responsabilidad a los impresores, litógrafos y grabadores.

Por Orden de 15 del actual (B.O. del 19), se extiende a los impresores, litógrafos y grabadores, la responsabilidad solidaria de autores y editores que se establece en el artículo 22 de la Orden de 29 de abril de 1938. Las sanciones podrán imponerse a las empresas y a los particulares.

Auxilio Social.

Por Orden de 15 del actual (B.O. del 19), quedan facultadas las Diputaciones, Cabildos Insulares y Ayuntamientos, para ceder terrenos gratuitamente a la Delegación Nacional de Auxilio Social para instalar residencias-Hogares de cumplidoras del Servicio Social de la Mujer, guarderías infantiles u otras instituciones análogas. También se facultan a los Ayuntamientos para adquirir por expropiación forzosa terrenos de igual destino.

Protección a las instituciones de la madre y el niño.

Una Orden de 17 del actual (B.O. del 19), confiere la vigilancia, a las Inspecciones de Sanidad, de las instituciones de protección y asistencia a la madre y al niño en lo que se relaciona con el aspecto sanitario.

Podrán recabar de los diversos servicios de las Inspecciones provinciales de Sanidad que les presten su ayuda en la medida que sea compatible con sus medios.

Las prevenciones y beneficios de la presente orden se extenderán a las obras Juveniles de F.E.T. y de las J.O.N.S. Si el número de inscriptos lo requiere, las Jefaturas podrán solicitar de otras Corporaciones o entidades provinciales la cooperación de sus técnicos para confeccionar las fichas sanitarias. Esta, se ajustará a un modelo único, aprobado por el Servicio Nacional de Sanidad del Ministerio del Interior.

El personal de enfermeras, deberá poseer el título expedido por los organismos autorizados para ello.

Composición de los platos en las comidas.

Una Orden de 30 del actual (B.O. del 31), fija los platos de que han de componerse las comidas y las rebajas que han de efectuarse en los precios de las pensiones debiéndose cumplir estas disposiciones, exponente de las normas de austeridad a que todos estamos obligados, sin perjuicio de las normas vigentes sobre plato único y Día sin Peste.

El plazo para que comience a regir se fija en el día 7 del próximo mes de Noviembre.

Ministerio de Hacienda.

Circulación de moneda.

Por Decreto de 29 del pasado Septiembre (B.O. de 12 del actual) autoriza al Ministro de Hacienda para poner en circulación monedas de 0,25 céntimos, con aleación de cobre y níquel por un importe de diez millones de pesetas.

Contribución de Utilidades.

Por Orden de 14 del actual (B.O. del 12), se dispone que las entidades que por la guerra hayan dejado de atender normalmente a sus necesidades financieras no vienen obligadas a contribuir, hasta nueva disposición, por el nº 3º de la tarifa 2ª de la Ley de Utilidades, con las modificaciones de la Ley de 19 de Junio de 1936, más que por los vencimientos o por la parte de los mismos que se hayan satisfecho o se satisfagan en adelante siempre que las entidades obtengan la concesión de este beneficio.

Para gozar de los beneficios deberá presentarse instancia ante el Delegado de Hacienda de la Provincia, expresando y justificando los motivos, y fijando las características de la emisión cuyos servicios ciertos no puedan ser atendidos.

Se citan las obligaciones de las entidades que obtengan resolución favorable en los plazos que se fijan.

Las falsedades serán sancionadas con la nulidad de la autorización concedida; con el pago del gravamen total desde el 18 de Julio de 1936 y con las penalidades máximas autorizadas por la legislación vigente.

La presentación de las declaraciones juradas, producirá la suspensión de la liquidación que normalmente hubiera procedido, o el ingreso de su importe en caso de haberse aquella practicado. Si la solicitud fuera denegada, se liquidarán intereses de demora.

Los beneficios sólo alcanzarán a los vencimientos posteriores al 18 de Julio de 1936.

El plazo de prescripción del artículo 27 de la ley, queda interrumpido.

Deuda del Estado: pago de intereses y admisión de facturas.

Por Orden de 11 del actual (B.O. del 15), se ordena a las Delegaciones de Hacienda que admitan desde la publicación de esta Orden las facturas de intereses de las Deudas con vencimiento de 1.º de Octubre, con el fin de proceder a su pago.

Las que venzan durante el cuarto trimestre de 1938 serán admitidas para su pago a partir del día siguiente al del respectivo vencimiento, previa la observancia de las formalidades debidas.

o

o o

Una Orden de 11 del actual (B.O. del 15), dispone que los tenedores de títulos de las Deudas del Estado y del Tesoro, así como de las especiales, que tengan a su favor la declaración de propiedad, deberán presentar en las Delegaciones de Hacienda, las facturas de cupones entre 1.º de Octubre y 31 de Diciembre.

Si los títulos tuviesen agotados los cupones, o se tratase de inscripciones nominativas, se presentarán tanto éstas como aquéllos, juntamente con la factura.

La presentación de las facturas, deberá llevarse a cabo en las Delegaciones que realizaron la calificación de la propiedad o de la legítima y pacífica posesión, y finalmente, por el Servicio Nacional de la Deuda Pública y Clases Pasivas, se dictarán las instrucciones oportunas para el desarrollo de las normas contenidas en la expresada Orden.

Moratoria.

Por Orden de 14 del actual (B.O. del 15), se dispone que en los términos municipales liberados de la provincia de Badajoz se entienda prorrogada la moratoria en treinta días naturales a partir de la prórroga anterior.

o

o o

Una Orden circular de 13 del actual (B.O. del 20), dispone que el Decreto de 27 de Agosto pasado sobre moratorias, se aplicará a las obligaciones de pago que no se suspendan por la mencionada Ley.

La moratoria concedida por Orden de 26 del pasado, en los términos municipales liberados de la Provincia de Castellón de la Plana, se prórroga por 30 días naturales, más según dispone la Orden de 27 del actual (B.O. del 29).

o o

Juntas administrativas bancarias.

Una Orden circular de 22 del actual (B.O. del 24), hace extensivo el nombramiento del Ministerio, a todos los Presidentes y Vocales de las extinguidas Juntas administrativas bancarias.

Secciones provinciales de Banca.

Por Orden de 22 del actual (B.O. del 24), se instituyen secciones provinciales de Banca en las Delegaciones de Hacienda de Avila, Badajoz, Bur

gos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Coruña, Granada, Guipúzcoa, Huesca, Málaga, Orense, Oviedo, Palma, Pontevedra, Salamanca, Santander, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Vizcaya, y Zaragoza.

Se establece la competencia de las Secciones provinciales de Bancos y se dispone que cesen en su cometido, a los diez días de la inserción de esta Orden en el Boletín, las Juntas de autorizaciones de reintegro hechos por los Establecimientos de Crédito.

Ministerio de Industria y Comercio.

Productos siderúrgicos y metalúrgicos.

Por Orden de 28 de Septiembre último (B.O. de 3 del actual), se suelven unas consultas sobre interpretación de las Ordenes de 7 de Junio y 13 de Julio próximos pasados, sobre precios de los indicados productos, en el sentido de que se refiere a los de tarifa en dicha fecha con todos los descuentos y bonificaciones que venían concediéndose como consecuencia de contrato verbal o escrito.

Para los productos no tarifados en 18 de Julio de 1936, regirán los precios de los suministros realizados en aquella fecha, y las liquidaciones que se hayan practicado se rectificaran abonándose las diferencias correspondientes a los perjudicados. Los consumidores habituales no podrán ser postergados y los Servicios correspondientes del Ministerio efectuarán un estudio sobre los descuentos o bonificaciones de unificación racional que sin perjudicar ni beneficiar a los productores, evite las desigualdades no justificadas, y coloque a los transformadores en situación de paridad que anule entre ellos toda posibilidad de obtener materias primas o transformadas necesarias para su trabajo en condiciones de precio con diferencias no debidamente fundamentadas.

Certificados de Productor Nacional.

El B.O. de 10 del actual, publica una Orden, fecha 3, aprobando la torce relación de Certificados de Productor Nacional, números provisionales del 241 al 260, entre los que figura nuestra asociada la S.A. Compañía Auxiliar de Ferrocarriles.

Pesca con artes de arrastre.

Por Orden de 30 del pasado Septiembre (B.O. de 9 del actual), se dispone que la pesca de arrastre que empieza en el 20 de Octubre corriente y termina el 10 de Mayo de 1939, se regulará en las distintas regiones (Regiones Cantábrica; Noroeste; Suratlántica y Canaria), con arreglo a las normas que en dicha disposición legal se establecen.

Comisión Ordenadora de la Producción y Distribución de cobre.

Por Orden de 10 del actual (B.O. del 14), se dispone que esta Comisión celebre sus reuniones en el Ministerio de Industria y Comercio, y en su domicilio permanente de Sevilla, por lo menos una vez al mes, creándose un Laboratorio Químico en Huelva al frente del cual estará el Ingeniero

Minas que forma parte de la Comisión.

Se establecen los cometidos de la Comisión que son: intervenir la producción de mineral de cobre, intervenir en las fábricas de la producción de cobre, en los precios de producción y venta, ordenar el aprovechamiento de la chatarra e intervenir en las importaciones de cobre.

Todas las minas cupríferas y entidades transformadoras de metales que contengan cobre, dependerán de esta Comisión, en todo lo que afecta a las funciones que se le señalan a esta en la mencionada Orden.

x

x x

Ministerio de Agricultura.

Riqueza forestal.

Por Decreto de 24 de Septiembre último (B.O. de 5 del actual), se prohíbe efectuar cortas en los árboles ni aprovechamientos leñosos sin autorización de la Administración Forestal del Estado, cuya prohibición afecta a las fincas rústicas pobladas total o parcialmente, por abedules, alisos, alerces, alcornoques, álamos, alisos, arces, castaños, chopos, cipreses, hayas, laureles, etc., quedando obligados los propietarios a presentar declaración jurada de las especies que cultiven.

Los dueños de las fincas que deseen aprovechar madera o leña, se dirigirán en impresos oficiales a los Ingenieros Jefes de los Distritos Forestales haciendo constar la superficie que ha de ser objeto de la corta, especificando sus clases con sus dimensiones, indicando el lugar de la finca donde tendrán lugar las cortas, aplicación de las maderas y destino de las mismas y de las leñas.

Quedan exceptuados los aprovechamientos para uso doméstico dentro de la propia explotación y las cortas que no excedan de 20 árboles en un año.

También se exceptúan de la autorización citada, los particulares montes de montes que sean aprovechados mediante Ordenación o Planes de aprovechamiento redactados de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Si las Jefaturas Forestales autorizaran alguna corta "a hecho" o "matarrasa" o de "aclareo", será condición que los propietarios reemplacen en el plazo de dos años la parte afectada por la corta que queda vedada al ganado por cinco años. Estos plazos se podrán ampliar por las Jefaturas durante el tiempo necesario para que las guías de los nuevos repoblados, queden fuera del alcance del diente del ganado.

Los gastos de reconocimiento de fincas los satisfará el propietario, y no excederán de 0,60 ptas. por cada uno de los 100 primeros; de 0,50 por los 100 siguientes; y de 0,25 los demás.

Las denuncias que se presenten darán lugar a la instrucción de expedientes en los Distritos, que resolverán los Ingenieros - Jefes con audiencia del interesado, pudiendo llegar las multas hasta 10.000 ptas. acordadas por los Ingenieros - Jefes, y hasta 50.000 ptas., las que imponga la Jefatura del Servicio Nacional de Montes, Caza y Pesca fluvial, pudiendo interponerse recursos contra las inferiores a 10.000 ptas. ante la Jefatura del Servicio Nacional, y contra las superiores a esta cantidad, ante el Ministerio de Agricultura.

Con el importe de las multas, se formará un fondo en cada Distrito forestal para premiar a los particulares que más se hayan distinguido en la repoblación.

Repoblación ganadera.

Por Decreto de 30 de Septiembre último (B.O. de 8 del actual), se dispone, que los agricultores remitirán a los Alcaldes, relación del ganado de recría, reproducción o trabajo que necesiten adquirir.

Los que deseen vender ganado de recría, enviarán a los Alcaldes relación del ganado que necesiten enajenar, expresando el número de cabezas, especie, raza, tipo comarcal, características generales y edades.

Los Alcaldes remitirán, semanalmente, a las Juntas Provinciales de Fomento Pecuaria las relaciones de ofertas o demandas recibidas.

El Servicio de Ganadería, abrirá concursos por especies para adquirir y distribuir ganado.

El ganado adquirido a plazos, quedará en poder del comprador a cepto de depósito y hasta la cancelación de la deuda no podrá enajenarlo, exigiéndose para el ganado trashumante, la guía de sanidad y declaración jurada del propietario viada por el Presidente Local de Fomento Pecuario en la que conste el número de cabezas y destino.

Se impone a las compañías ferroviarias la obligación de no facilitar el ganado de recría, reproducción o trabajo a las Provincias que les entregue al Servicio de Ganadería, si no llevan la guía citada, siendo responsables de las infracciones los propietarios de los vehículos sobre los que recaerán las sanciones.

Los ganaderos, que teniendo fincas en explotación quieran realizar directamente sus compras, podrán hacerlo previa declaración, comprometiéndose a no enajenar el ganado adquirido en plazo menor de seis meses, excepción del destinado a rastrojeras, montaneras, o pastos eventuales.

El Servicio de Ganadería, queda facultado para sancionar las infracciones con multas hasta la cuantía de 10.000 pesetas, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños a que hubiere lugar. Los inculpados podrán recurrir ante el Ministerio de Agricultura.

El Servicio Nacional de Crédito Agrícola, coadyuvará al cumplimiento de estas disposiciones, mediante la concesión de préstamos para ganaderos, en la medida que permitan sus disponibilidades.

x

x

x

Ministerio de Educación Nacional.

Patronatos de Formación Profesional: nombramiento.

Por Orden de 3 del actual (B.O. del 5), se nombra a D. Santiago González Sola, Presidente del Patronato Local de Formación Profesional de Granada.

Utilización de Bibliotecas por los alumnos de Enseñanza primaria.

Por Orden de 8 del actual (B.O. del 16), se confía a los Maestros la organización, durante el curso, de visitas colectivas a Bibliotecas

las exposiciones en la escuela de las bibliotecas o libros privados de los alumnos; la concesión de premios a los lectores asiduos de un ciclo de cuentos; las representaciones mudas de narraciones infantiles; la organización semanal de la "Hora feliz del cuento", etc.

Se mantendrá la relación frecuente de los Maestros con los funcionarios del Cuerpo facultativo de Archiveros y se confía a los inspectores de Primera enseñanza y a los de Biblioteca la información trimestral sobre el cumplimiento de esta Orden. La Junta de Adquisición de libros velará, porque en las Bibliotecas públicas se formen y mantengan buenas, selectas colecciones de libros infantiles y de referencias o información general.

Podrán los Bibliotecarios organizar ciclos de estudios y de discusión en torno a la literatura del niño, y la Inspección, de acuerdo con los Bibliotecarios, acomodará la ejecución de estas prácticas a las condiciones de edad y capacidad de los escolares.

Constitución de Patronatos provinciales para el fomento de Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos.

Un Decreto de 13 del actual (B.O. del 22), fija en un mes el plazo para que se constituyan los Patronatos para el fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos, debiendo estar integrados los Patronatos por un Presidente, dos Vicepresidentes y once Vocales nombrados por el Ministro de Educación Nacional, y uno de ellos por el Obispo de la Diócesis, tres funcionarios del Cuerpo de Archiveros, si es factible, otro Vocal de F.E.T. y de las J.O.N.S., un representante de la Comisión de Monumentos, y cuatro personas de acreditada competencia.

Los cargos son honoríficos y gratuitos.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento de este Decreto.

Depósito Legal.

Por Decreto de 13 del actual (B.O. del 23), se considerarán objeto del depósito legal toda clase de escritos, imágenes y composiciones musicales reproducidas en ejemplares con miras a su difusión por un procedimiento mecánico o químico, debiendo llevar las reproducciones la indicación del nombre del impresor o del productor, lugar de su residencia y cifra íntegra del año de la creación o de la edición de la obra.

Se exceptúan de la anterior obligación, los impresos mercantiles, títulos, circulares, etc., y los de carácter administrativo.

Se determinan las obligaciones del impresor o productor de una obra acerca del depósito en la Biblioteca del Estado de un ejemplar corriente de los impresos fabricados por él, y se impone la obligación de consignar en las fotografías que se pongan a la venta, el nombre del autor o del concesionario del derecho de reproducción, así como el año en que se hubiesen tomado.

El editor y el agente, deberán depositar un ejemplar íntegro en la Biblioteca Nacional en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que hubiese puesto a la venta. Los libros, editores, fabricantes o agentes concesionistas, deberán efectuar el depósito de dos ejemplares con suje-

ción a lo preceptuado en el artículo anterior. En los libros llamados de lujo y en las tiradas artísticas bastará la entrega de un ejemplar único, que se verificará en la Biblioteca Nacional. En las obras ya publicadas, bastará con una declaración por duplicado con indicación de lo ya enumerado, y con especificación del número de ejemplares, de que consta la tirada y la fecha del depósito.

Finalmente, se establecen las sanciones sobre declaraciones falsas y sobre cualquier infracción, que oscilará entre cincuenta y tres mil pesetas, pudiéndose elevar hasta seis mil pesetas en caso de reincidencia.

Las multas se harán efectivas por las vías de apremio en las Delegaciones de Hacienda.

La presentación de ejemplares en la Biblioteca Nacional, otorga al depositante los beneficios de la posesión civil sobre las obras de que se trate.

Formato del libro de calificación escolar.

Por Orden de 26 del actual (B.O. del 31), se dispone que el libro de calificación escolar tendrá 100 hojas numeradas con una cubierta que llevará la siguiente inscripción: "Ministerio de Educación Nacional. Enseñanza media. Libro de calificación escolar".

Se abonará 5 pesetas por cada libro como derechos de expedición y el importe oficial del mismo, siendo su adquisición obligatoria para todos los alumnos del Bachillerato. Las diligencias que se extiendan en cada libro, llevarán la firma del secretario y el Vº Bº del Director de cada Centro oficial o privado.

Ingreso en los centros de enseñanza media.

Una Orden de 26 del actual (B.O. del 31), fija las normas a que han de ajustarse quienes traten de ingresar en la enseñanza media, entre las que figuran haber cumplido 10 años de edad o que los cumplan dentro del año natural en que se verifique la inscripción.

Para prueba de ingreso habrá una sola convocatoria que será entre los días 10 y 20 de Septiembre.

Indica las pruebas a realizar y fija las calificaciones de "apto" y "no apto".

Escolaridad de la Segunda Enseñanza.

Una Orden de 26 del actual (B.O. del 31), establece las normas a seguir para obtener la dispensa de la escolaridad en todo o en parte, oída la Comisión Asesora correspondiente.

Diligencias y tasas en los Centros de Enseñanza Media.

Una Orden de 26 del actual (B.O. del 31), dicta normas sobre formalización de inscripciones para efectos fiscales y económicos por cursos completos durante el mes de Septiembre de cada año, en el Instituto que el Ministerio determine.

Los Alumnos abonarán 60 pesetas por curso en papel de pagos al contado y 50 en metálico en tres plazos; el 1º, de 30 pesetas en papel y en metálico al formalizar la inscripción; el 2º, de 20 ptas., en papel.

10 en metálico en Febrero; y el último de 10 ptas., en papel y 20 en metálico, en Abril.

A continuación fija la Orden los derechos de los demás actos y contribuciones, y la administración de los fondos.

Comisión Asesora de 2ª Enseñanza.

Una Orden de 26 del actual (B.O. del 31), establece la Comisión Asesora de Segunda Enseñanza en el Ministerio de Educación Nacional.

Estará presidida por el Sr. Subsecretario y será Vicepresidente el Jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media y los Vocales los nombrará el Ministro.

El Pleno de la Comisión designará una Junta Permanente, no inferior a tres miembros, para dictaminar los asuntos de menor trascendencia que la sean sometidos por la Jefatura.

X

X X

Ministerio de Obras Públicas.

Pases por ferrocarril.

Un Decreto de 13 del actual (B.O. del 21), fija las normas que en lo sucesivo se han de tener en cuenta para la concesión de pases por ferrocarril.

En primer lugar, se prohíbe la concesión de billetes gratuitos con rebaja de precio que no figure en las tarifas, exceptuándose los billetes de caridad, los del personal ferroviario, los de los pensionistas y los aprobados por el Ministerio de Obras Públicas.

Se define lo que se entiende por agente ferroviario y por familia del agente, no considerándose como tales ni a los hermanos políticos ni a los abuelos para el disfrute del billete.

Quedan subsistentes los billetes de caridad.

Los obreros sin trabajo tienen derecho a billete colectivo gratuito hasta el lugar donde vayan destinados por el Ministerio de Organización y Acción Sindical.

Cada Ministerio, disfrutará de 4 pases al portador independiente de los que de antiguo venían disfrutando.

O O

Por Orden de 22 del actual (B.O. del 25), se dispone que por el Servicio Nacional de Ferrocarriles se den las órdenes para que por los Departamentos ministeriales se remitan al de Obras Públicas, la relación de Autoridades y funcionarios incluidos en el Decreto antes mencionado así como el cargo que desempeñan.

X X X

Ministerio de Organización y Acción Sindical.

Infracción de Leyes sociales: reglamentación, pago, e inversión de las multas.

Un Decreto de 7 del actual (B.O. del 14), dispone que el abono de las multas por infracción de las leyes sociales, se abone siempre en pa-

del de pagos al Estado, remitiendo la parte inferior a la Delegación Provincial de Hacienda.

Las Autoridades darán cuenta del pago al Ministerio de Organización y Acción Sindical y a la Delegación de Hacienda de la Provincia.

Mensualmente, las Delegaciones de Hacienda remitirán al Servicio Nacional del Tesoro las mitades del papel de pagos al Estado con relación numérica de las mismas, a fin de devolver su importe con cargo a la Renta del Timbre, y su ingreso en una cuenta que se abrirá en la Intervención de la Delegación de Hacienda de la provincia en que tenga su residencia el Ministerio de Organización y Acción Sindical.

Quedan derogados, en cuanto contradigan lo establecido en esta disposición, el artículo 61 del Reglamento de 23 de Junio de 1932; el párrafo 5º del artículo 27 del Decreto de 12 de Junio de 1931, y los párrafos 1º de los artículos 52 del Decreto de 8 de Octubre de 1932 y 179 de su Reglamento de 31 de Enero de 1933, así como cuantas otras disposiciones se opongan o modifiquen el contenido de este Decreto.

Reglamento de Síndicos Económicos.

Por Decreto de 5 del actual (B.O. del 9), se aprueba el Reglamento de "Síndicos Económicos" para la aplicación del Decreto de 5 de Agosto de 1938.

Este Reglamento consta de 31 artículos, distribuidos en cuatro capítulos, que se refieren al número de Síndicos por Servicios, rama, provincias y clases de trabajadores; al nombramiento de los Síndicos; a las funciones y prerrogativas de los Síndicos y sus responsabilidades; y a las disposiciones generales.

Dada su extensión, y, el poco espacio disponible, nos limitamos a extractar, siquiera sea con la mayor amplitud posible, las principales disposiciones del mismo.

Comienza clasificando las ramas económicas y los servicios a que en su artículo 2º se refiere el Decreto de 5 de Agosto de 1938, en 20 grupos a los que corresponden los cereales, frutos y huerta, alcoholes y bebidas, aceite, plantas industriales, maderas, zooteoría, pesca, textil, construcción, metal y construcciones metálicas, minas, industria química, papel y artes gráficas, agua, gas y electricidad, transportes y comunicaciones, viviendas y hospedaje, banca y seguros, profesiones liberales y actividades diversas.

Para el nombramiento de Síndicos, se tendrá en cuenta el censo profesional respectivo y el desarrollo económico de las diversas ramas de riqueza en la provincia, siendo su número, de dos a doce por cada rama y servicio que deban considerarse en cada provincia.

La determinación del número de Síndicos, que corresponde atribuir a cada clase de trabajo dentro de una misma rama o servicio, se acentúa en lo posible, a la proporción, de un tercio por el personal directivo de la empresa, y otro tercio por el personal técnico y titulado, y otro por los empleados y obreros.

Determinado el número de Síndicos Económicos provinciales, el Ministro de Organización y Acción Sindical, determinará el número de Síndicos nacionales que hayan de ser designados por los mismos y su pro-

ción.

El número de Síndicos Nacionales guardará la proporción de 1/5 a 15 % del número de Síndicos provinciales.

Constituida la Junta provincial, solicitará el Delegado Sindical a las autoridades el nombramiento en el plazo que señale de sus representantes en la Junta. El Delegado convocará a los titulares para constituir la Junta que él presidirá actuando de Secretario el más joven. Dada lectura al Decreto de 5 de Agosto, se dará cuenta a los reunidos del número y clase de trabajo de los Síndicos a que debe referirse la propuesta que la Junta haya de elaborar.

El Presidente, convocará las sesiones con tres días de antelación, fijará su orden del día, y las presidirá. Para los acuerdos se necesita la mayoría de dos tercios, consignándose por escrito los votos particulares. Cuando no haya acuerdo, se elevará la propuesta del Delegado Sindical con los votos particulares al Ministerio.

La junta provincial confeccionará una propuesta de candidatos por cada servicio o rama, en doble número del de síndicos que hayan de ser elegidos.

Hechas las designaciones, el Jefe del Servicio Nacional de Sindicatos, convocará a sesión constitutiva, la cual se celebrará conforme al artículo 7º para las Juntas Provinciales.

Pueden ser propuestos candidatos: los españoles mayores de 25 años, que lleven más de 5 años en la profesión u oficio, y dos, por lo menos, en la clase de trabajo que haya de representar: residir más de un año en la Provincia; y gozar de buena fama acreditada, así en orden a conducta como a su competencia y autoridad moral.

No pueden ser Síndicos Económicos, los funcionarios que pertenezcan a organismos dependientes de los Ministerios de Industria y Comercio, Agricultura, Obras Públicas, y Organización y Acción Sindical.

Para ser Síndico Nacional se requiere haber obtenido la designación de Síndico provincial de la misma rama.

Los que procedan de la zona no liberada podrán ser designados Síndicos Nacionales, sin haber sido antes provinciales.

Todos los Síndicos serán nombrados por el Ministro de Organización y Acción Sindical entre los propuestos en doble número por las Juntas respectivas.

En el capítulo titulado "de las funciones y prerrogativas de los Síndicos y sus responsabilidades" se dispone, que el cargo de Síndico es obligatorio y su desempeño constituye un acto de servicio nacional.

No podrán eximirse de él más que las personas mayores de sesenta años y las que padeciesen enfermedades crónicas agudas.

Tampoco se podrá renunciar, sino por las propias causas y por trasladar su residencia el Síndico provincial fuera de la provincia, o éste el nacional, fuera del territorio patrio.

Los Síndicos provinciales tomarán posesión de su cargo en la Central Nacional-Sindicalista de la provincia, y los nacionales en la Jefatura del Servicio Nacional de Sindicatos.

Unos y otros jurarán solemnemente su cargo en ceremonia pública, y tendrá lugar en todas las capitales de provincia, en un mismo día,

que se señalará en la Orden Ministerial que haga la convocatoria. La fórmula de juramento, será la siguiente: "Juráis servir vuestros cargos de Síndicos Económicos con espíritu de justicia y de lealtad; poner en su desempeño toda la competencia y el esfuerzo de que seáis capaces; apartar de vosotros cualquier mira de provecho particular o de interés de clase y supeditar todo otro interés al supremo de la Nación?"

Los Síndicos provinciales dependerán directamente de la Central Nacional-Sindicalista de la respectiva provincia.

Los nacionales del Servicio Nacional de Sindicatos, del Ministerio de Organización y Acción Sindical.

El cargo de Síndico Económico, sea provincial, sea nacional, durará tres años. La renovación se hará por terceras partes. Los que se nombren la primera vez, podrán ser revocados al acabar el primer año o el segundo.

El Ministro de Organización y Acción Sindical podrá, en cualquier momento, y sin perjuicio de lo dispuesto sobre sanciones en el artículo veintisiete, remover de sus cargos a los Síndicos que, en el ejercicio de sus funciones, procediesen con negligencia, mala fe o incompetencia, y a cualquiera de ellos cuando así conviniese para el servicio o en beneficio de la Organización Sindical.

Para cubrir las vacantes de Síndicos que se produzcan, podrá el Ministro de Organización y Acción Sindical designar libremente a los que, habiendo sido propuestos como candidatos por las Juntas, para la propia clase de trabajo, no obtuvieron la designación ministerial.

Estas personas actuarán, también, de suplentes de los respectivos titulares, en los casos en que éstos, temporalmente, no pudiesen prestar sus funciones por enfermedad, ausencia, nombramiento para cargo público u otra causa justificada.

Podrán requerir la designación de Síndicos provinciales, para prestar servicio dentro del territorio provincial respectivo, las Autoridades delegadas de los diversos Ministerios en las provincias y las Diputaciones provinciales. Cuando una Autoridad distinta de éstas necesitare su intervención, la solicitará por conducto de alguna de ellas, la cual resolverá en cada caso, si debe o no hacer el requerimiento. Los Ayuntamientos la solicitarán de la Diputación provincial respectiva, excepto los de población superior a veinte mil almas, que podrán requerirla por sí mismos.

La designación de Síndicos nacionales para intervenir en los problemas de carácter nacional será requerida, precisamente, por los titulares del Ministerio del ramo respectivo, o mediante su delegación expresa, por los Subsecretarios y Jefes de Servicios Nacionales.

Quando se trate de asuntos que interesen conjuntamente a dos o más provincias, sean o no limítrofes, podrán las mismas Autoridades de la Administración central requerir la designación de Síndicos de todas ellas.

La designación de los Síndicos provinciales que hayan de prestar los servicios para que son requeridos por las Autoridades de ese orden será hecha, en cada caso, por el Delegado Sindical respectivo. La de los Síndicos nacionales, por el Ministro de Organización y Acción Sindical.

en virtud de delegación expresa, por el Jefe del Servicio Nacional de Sindicatos. La de los Síndicos de varias provincias que fuesen requeridos para el despacho conjunto de una cuestión, por el mismo Ministro, pero a propuesta de los Delegados Sindicales de las respectivas provincias.

Todo requerimiento será hecho por escrito y en él se expondrá, con el posible detalle, la clase de funciones para que son llamados los Síndicos, si consultivas, deliberantes o de gestión; su duración aproximada y la continuidad o periodicidad de su prestación; la rama y clase de trabajo a que deban de pertenecer. El escrito se ajustará al modelo que se publica como anexo B) de este Reglamento.

Su designación para el cargo no confiere a los Síndicos ninguna función de carácter permanente y sólo los capacita para desempeñar aquellas que entre las asignadas en el Decreto de cinco de agosto de mil novecientos treinta y ocho les sean encomendadas por las Autoridades competentes.

En ningún caso se podrá requerir el concurso de los Síndicos para que presten servicios profesionales de carácter pericial, es decir, los que, hasta el presente, se hubiesen venido encomendando, mediante retribución, a los técnicos. Cuando los Delegados Sindicales o el Ministerio de Organización y Acción Sindical recibiesen algún requerimiento para ejercer funciones o servicios de esta clase, lo rechazarán de plano.

Los Síndicos podrán concurrir con personas de otro carácter y de distinto nombramiento; funcionarios, técnicos, representantes del Movimiento, para el desempeño de una función cualquiera. En todo caso, las autoridades que establezcan las Comisiones en que hayan de concurrir y otros, deberán concertar con el Ministro de Organización y Acción Sindical la proporción que deba guardarse entre ellos, y en relación al número total de los miembros de las mismas.

Un mismo Síndico Económico podrá ser designado para varias funciones simultáneas si éstas fuesen compatibles entre sí, pero se procurará que, sucesivamente, entren en funciones todos los Síndicos, para lo cual se guardará, en lo posible, un cierto turno al hacer las designaciones.

Quando un Síndico nacional hubiese intervenido en un asunto en la esfera provincial, no podrá ser designado para conocer del mismo asunto en la esfera nacional, y a la inversa.

Las autoridades podrán recusar a un Síndico cuando demostrasen que puede tener un interés directo y personal en el asunto para que fué requerido. Los propios Síndicos podrán alegar la causa de posible recusación ante la Autoridad que trate de designarlos para un determinado trabajo.

Quando un Síndico cumpliera los tres meses en el desempeño de la misión determinada, si él lo solicitare o si conviniera al servicio, será relevado de ella y sustituido.

Los Síndicos asalariados percibirán por su trabajo unas dietas de cuantía igual a los salarios que dejaren de percibir por faltar a su trabajo ordinario, cuando éstos excedan del importe de quince jornales cada año, más los gastos de desplazamiento a que se viesen obligados. Para acreditar estos haberes, los Síndicos habrán de presentar

el certificado de la empresa en que trabajan, sobre los salarios que hubiesen dejado de percibir y la relación justificada de los gastos.

Los salarios de las quince primeras jornadas serán satisfechos por las empresas. Estas no tendrán derecho a detraer ninguna parte de los sueldos de los empleados y técnicos que prestan servicio de Síndicos. Las dietas les serán satisfechas a los Síndicos provinciales por los Delegados Sindicales, y a los nacionales por el Servicio Nacional de Sindicatos.

Los Síndicos usarán un distintivo con la insignia de su categoría y grado. El cuadro de distintivos se determinará por una Orden del Ministerio de Organización y Acción Sindical.

Los Síndicos gozarán de precedencia en los actos sindicales.

Cuando la Autoridad que hubiese requerido sus servicios, tuviese queja de la conducta de algún Síndico Económico sea a causa de su negligencia, de su indisciplina o de su incompetencia o por cualquier otro motivo, lo pondrá en conocimiento de la Autoridad sindical que le nombra, nombrado, la cual, examinado el caso, con las pruebas que fuesen aportadas y dando audiencia al interesado, podrá imponer a éste cualquiera de las sanciones a que se refiere el artículo vigésimo octavo.

Las sanciones que el Ministro de Organización y Acción Sindical, a propuesta del Jefe del Servicio Nacional de Sindicatos o de los Delegados Sindicales Jefes de las Centrales Nacional-Sindicalistas provinciales pueden imponer a los Síndicos, serán:

- a) Amonestación privada.
- b) Apercibimiento público.
- c) Multas de cinco a veinticinco mil pesetas.

El apercibimiento se hará dando publicidad al mismo en el "Boletín Oficial", de la provincia correspondiente.

Para la recaudación de la multa se podrá emplear el procedimiento de apremio.

El Consejo de Ministros, a propuesta del de Organización y Acción Sindical, puede imponer, además de esas sanciones, las siguientes:

- a) Multas hasta cincuenta mil pesetas.
- b) Destitución del cargo de Síndico Económico.
- c) Inhabilitación para la profesión u oficio.

La destitución, impuesta como sanción, llevará implícita una nota de deshonor profesional.

La inhabilitación para el desempeño de la profesión, oficio o actividad económica de un Síndico, podrá ser temporal o permanente, y abarcará mayor o menor extensión, en orden a la actividad que restrinja, según la gravedad de la falta.

Contra las sanciones cabrá recurso de súplica ante la Autoridad que las hubiera impuesto dentro del plazo de diez días.

Finalmente, las disposiciones generales establecen, que en los presupuestos de las Centrales Nacional-Sindicalista y en los del Ministerio, se consignarán las partidas con destino al pago de los gastos que ocasione el nombramiento y actuación de los Síndicos, y la administración

se hará como las demás de los mismos presupuestos, y en todo caso actuales, de Ordenadores de Pagos, los Delegados Sindicales en las provincias y el Jefe del Servicio Nacional de Sindicatos en el Ministerio de Organización y Acción Sindical.

Cuando los Síndicos hubiesen intervenido a requerimiento de Autoridades provinciales o municipales o de servicios patrimonializados, los gastos ocasionados podrán reintegrarse las Centrales y el Servicio Nacional de Sindicatos.

Los Inspectores de Trabajo, cuidarán de comprobar la exactitud de las certificaciones que expidan las empresas acerca de los días que han estado de trabajar en ellas los Síndicos, en razón del ejercicio de su cargo y de los salarios perdidos por esa causa.

Las simulaciones se castigarán con multas del duplo, que se impondrán a la empresa y al interesado.

Finalmente, se publican dos anexos: a) y b). En el primero que se refiere a la ficha de cada candidato constará el nombre y apellidos, edad, residencia, y tiempo de esta, concepto moral, antecedentes, profesión, especialidad, tiempo en la profesión, y en la clase, estudios y títulos académicos, trabajos profesionales, y personas que pueden dar referencia.

En el reverso se clasificará la rama o servicio, la Provincia, y la clase de trabajo.

El requerimiento (anexo b) a los Síndicos se hará por escrito con arreglo al siguiente formulario: Autoridad que requiere; Servicio o ramas que deben pertenecer los Síndicos; Número de Síndicos que se demandan; a qué clase de trabajo; funciones que se desea encomendarles; duración de ellas; periodicidad de los servicios requeridos; organismos a que deben incorporarse; su composición; Localidad, local y hora de la reunión.

Personal: separaciones del servicio.

Por Orden de 30 del pasado Septiembre (B.O. de 11 del actual), se separa definitivamente del servicio como Auxiliar de la primera Agrupación de los extinguidos Jurados Mixtos de Valladolid, a D. Pedro Llanos Pérez.

o o o

Por Orden de 5 del actual (B.O. del 12), se separa del servicio, siendo baja en el Escalafón, a D. José Luis Larrañaga Ortega, Oficial de Emisión.

Mercados dominicales.

Una Orden de 3 del actual (B.O. del 12), concede autorización para mercado dominical en la villa de Teror (Las Palmas) que ha de celebrarse de 8 a 2 de la tarde, dando a la dependencia las compensaciones acordadas en el Decreto de 8 de Junio de 1925.

o o o

Otra Orden de 3 del actual (B.O. del día 12), hace igual concesión al Ayuntamiento de Vega de San Mateo, en las mismas horas que el anterior con idénticas compensaciones.

Accidentes del trabajo en la industria:Reforma del Reglamento de 31 de Enero de 1933.

Aun cuando ya conocen nuestros Asociados el texto íntegro de esta importante disposición, (Decreto de 13 del actual, B.O. del 23), que les remitimos a su debido tiempo, vamos a extraer sus principales puntos lamentando que la falta de espacio nos impida publicarla nuevamente con mayor amplitud.

El plazo de un mes que señala el artículo 40 del Reglamento de la Ley de accidentes del trabajo para la constitución y pago de las rentas debidas por indemnización, se computa desde la fecha en que se da el alta de curación con incapacidad permanente, o en que venza el año a partir del día del accidente, sin obtener la curación o desde el fallecimiento del obrero.

Se concede un plazo de diez días, para que las Compañías Mercantiles y Mutualidades patronales remitan a la Caja Nacional la solicitud de determinación de incapacidad permanente y de la cuantía de la pensión con la documentación para calcular el coste de la misma.

Si no se puede procurar la documentación completa, se remitirá dentro de los diez días: el alta del obrero; el certificado de defunción, si hubiere fallecido; cuantía del salario, nombre, apellidos y domicilio del obrero; descripción del accidente; y declaración de si acepta o rechaza la responsabilidad del accidente.

Efectuado el ingreso en la Caja Nacional, del importe de las rentas aquélla realizará por mensualidades vencidas su pago a los beneficiarios.

Se fija en un mes, el plazo para que la entidad aseguradora o el patrono no asegurado, ingresen el capital determinado para constituir la renta llevando la demora del ingreso del capital, implícita el recargo del interés legal del 5 %.

Además de las sanciones que se señalan en la Ley y Reglamento, se pondrán imponer a propuesta de la Caja Nacional, multas de 10 a 100 pesetas por día de retraso en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

La sentencia que dicte la Magistratura del Trabajo en cuanto a la existencia o naturaleza del accidente indemnizable, será ejecutiva aunque el condenado interponga recurso de casación.

Se fija la forma de constituir el Fondo de Compensación de la Caja Nacional, para restituir a las entidades aseguradoras el importe de rentas abonadas en los casos en que se anulen o reduzcan las acordadas por la Caja Nacional o por la Magistratura del Trabajo.

Se fija la forma en que han de cooperar las Delegaciones Sindicales provinciales a la protección que la ley dispensa a los trabajadores víctimas de accidentes, o a sus familias.

Finalmente, en cuatro disposiciones transitorias, se establecen normas relativas a los expedientes en tramitación en la Caja Nacional, al ingreso en el plazo de 30 días en la Caja Nacional o en cualquiera de las colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión de las cantidades

se consignadas a los efectos de recursos de casación contra sentencias dictadas en juicios por accidentes del trabajo; el plazo de 3 meses para que las compañías aseguradoras se provean de las pólizas necesarias para funcionar legalmente en la España Nacional; y, por último, a las sanciones que podrá imponer el Ministro por infracciones anteriores a este Decreto, que podrán llegar hasta la cuantía máxima de 50.000 pts.

Creación de la Junta Administradora Nacional de Casas Baratas y Económicas.

Por Decreto de 13 del actual (B.O. del 24), se disuelven el Patronato de Política social Inmobiliaria, y la Junta de este Patronato, y se constituye la Junta Administradora Nacional de Casas Baratas y Económicas, que ejercerá las funciones ejecutivas que correspondían al Patronato y Junta, y estará formada por un Jefe Delegado nombrado por el Ministro y dos vocales.

Esta Junta tendrá personalidad propia, y serán sus atribuciones recaudar las cuotas de amortización e intereses; seguir los procedimientos de apremio por descubiertos; vender las fincas embargadas, y realizar los fines que se la encomienden por el Ministerio de Organización y Acción Sindical.

La Junta debe rendir trimestralmente cuenta de su gestión al Servicio Nacional de Sindicatos del Ministerio. El personal corresponde designarlo al Ministro.

Los gastos de la Junta se ajustarán al presupuesto que se aprobará por el Ministerio de Organización y Acción Sindical y la cuenta en nómina abierta en la Tesorería Central de Hacienda, se transferirá a una nueva que se abrirá a nombre de la nueva Junta.

Todas las facultades concedidas al Patronato y que no se encomiendan a la actual Junta, pasan a la competencia del Servicio Nacional de Sindicatos del Ministerio de Organización y Acción Sindical.

Reincorporación de los combatientes.

Por Decreto de 14 del actual (B.O. del 24), se dictan interesantes disposiciones sobre la reincorporación de los combatientes a los puestos de trabajo, de honor o de mando, (Declaración XVI del Fuero del Trabajo). Aunque ya conocen nuestros asociados todo el texto de este importante Decreto, por habérselo remitido a su tiempo, vamos a referirnos, siquiera sea su extracto, dado el poco espacio de que disponemos, a los principios fundamentales consignados en el mismo.

En los primeros artículos, se dictan normas para completar las relaciones militares cuya confección se ordenaba a los señores generales de Cuerpo de Ejército, con el envío al Servicio de Reincorporación una copia de la relación de soldados incluidos en la lista de la relación de Comisario correspondiente al 12 de Noviembre próximo.

El individuo movilizado o en su nombre cualquier persona de su familia, formulará una declaración de su situación como trabajador en la época de incorporación a filas.

Las industrias que al finalizar la guerra puedan colocar más personal del actual, darán cuenta en el plazo de un mes, a partir de la fecha

del Decreto y posteriormente cada seis meses, del nº de trabajadores que podrán despedir o admitir, con carácter informativo, cumplimentando los Modelos II y III que acompañan al Decreto.

Su incumplimiento se sancionará con multas de 50 a 500 pesetas que se impondrán por los Delegados de Trabajo pudiendo recurrirse en alzada al Ministerio de Organización y Acción Sindical.

La falta de presentación por los patronos de las declaraciones radas de la Orden de 14 de Octubre último, se castigará con multas de 50 a 500 pesetas.

En el plazo de 15 días, se constituirá en cada capital de provincia una Comisión Provincial de Reincorporación, integrada por un Jefe del Ejército, Delegado de Trabajo, Delegado Sindical, un Oficial de la Caja de Reclutamiento, y un Representante de F.E.T. y de las J.O.N.S. Actuando como Secretario el Inspector de Migración.

Se fijan las atribuciones de estas Comisiones y se ordena el establecimiento en cada Partido Judicial de una Representación del Servicio de Reincorporación de los Combatientes al Trabajo, designando, las personas que han de formar cada representación, y cuales sean sus atribuciones.

Respecto a los trabajadores eventuales cuando sean llamados a las, tendrán derecho preferente después de los propietarios, para colocarse en la empresa al producirse vacantes.

Subsidios familiares: aprobación del Reglamento; rectificación a la Base 2ª de la Ley de 18 de Julio de 1938.

Por Decreto de 20 del actual (B.O. del 26), se aprueba el Reglamento de la Ley de Subsidios familiares y aun cuando hemos enviado también el texto íntegro del mismo a nuestros asociados, a raíz de su publicación damos a continuación un resumen de sus principales disposiciones.

El Reglamento que se compone de 83 artículos y 7 disposiciones transitorias comienza definiendo lo que se entiende por subsidio familiar, por beneficiario, por subsidiado, asegurado, afiliado y finalmente por cuota.

Se ocupa después de la finalidad y campo de aplicación, de la obligatoriedad y de los patronos exceptuados, entre los que figuran los que ocupan como obreros a los mismos a quienes ellos, a su vez, en otros días o temporadas, les prestan su trabajo en equivalencia del que ellos realizaron, a los que ocupen trabajadores en servicio doméstico y a los trabajadores a domicilio.

A continuación, trata del régimen especial, de la reversión al régimen común, de las mejoras, asegurados, beneficiarios y obreros exceptuados, dedicando el capítulo segundo a la igualdad de los subsidios, uniformidad, y escala de subsidios que comienza con 15 ptas., mensuales a los que tengan dos hijos y llega a 145 ptas., mensuales cuando el número de hijos sea de doce.

Establece el cómputo de los períodos, revisión de escala, mejoras, prescripción del subsidio y dedica el Capítulo 3º a las cuotas y deducciones de los patronos y asegurados y del Estado.

En el capítulo 4º se concede al Instituto Nacional de Previsión, mediante la Caja Nacional, la Organización y gestión del Régimen Obligatorio.

torio de Subsidios familiares, estableciendo la competencia, gestión, gobierno y dirección, especificando las atribuciones y deberes del Director delegado, del Consejo, de la Comisión permanente, y de los servicios y entidades auxiliares, dedicando el capítulo 5º al procedimiento administrativo y al empadronamiento de los asegurados.

El Capítulo 6º trata del régimen financiero y del sistema de reparto, estableciendo las infracciones y el procedimiento penal y administrativo, tratando, finalmente, las disposiciones transitorias de la prestación, censo inicial, cooperación de las Delegaciones Sindicales, cuota de cuota inicial, sanción, Estado y corporaciones; y fecha de implantación que se fija en 1º de Febrero de 1939, debiéndose cumplimentar los padrones correspondientes en el de Noviembre próximo.

o

o

o

Por Orden de 19 del actual (B.O. del 26), se inserta la rectificación a la base 2ª de la Ley, debiendo decir "se determinará por período mensual, semanal, o por días, según se trate de los que trabajen más de 23 días al mes, cinco o más días a la semana o menos de cinco días a la semana con arreglo a la escala ya publicada en el artículo 16 del Reglamento".

&!&!&!&!&!&
!&!&!&!&
&!&
&

ifica-
8.

Reglamento
también
licación
nes.

ciones
dio fami-
almente

de la obli-
an los qu
otros de
ellos res-
y a los

ión al
s excepto
dios, uni-
les a los
número

mejoras
as y dem

revisión
men Obli-

